no transar

Órgano de Prensa del Partido Revolucionario Marxista Leninista

¡Proletarios y Pueblos de Todos los Países Oprimidos... Uníos!

Año 27 - Nº 190 (3ra. época) | **Precio $200 - Solidario $300** | 14-02-2024

Enfrentar el ajuste de Milei

desde la lucha popular

1923-2023

100 años de la muerte de Lenin

"Salvo el poder, todo es ilusión"

Primeros impactos del ajuste

En sus primeros 60 días, el gobierno nacional implementó una devaluación y una serie de medidas que -sumadas a la ofensiva empresarial con precios y salarios- tuvieron un profundo impacto en el bolsillo de los sectores populares. La retirada de la ley ómnibus es una derrota política para Milei pero no es el fin del ajuste,el cual buscarán implementar por medio de decretos, desregulaciones, inflación y recortes de gasto público.

Más allá del discurso anarco-capitalista y ultraliberal, el objetivo concreto del plan económico de Milei es provocar una brutal transferencia de ingresos del sector trabajador hacia el capital ("de abajo hacia arriba") y, dentro del empresariado, de los sectores pequeños y medianos enfocados en el mercado interno hacia las multinacionales, grandes monopolios, exportadoras y capitales extranjeros ("de adentro hacia afuera"). Ese objetivo general tiene varios métodos: la desregulación de la economía, que desata las manos del empresariado en materia de precios y salarios; el pago de la deuda externa con el FMI y los acreedores privados, que deja al capital financiero como principal ganador; y el achicamiento de las funciones, el presupuesto y el tamaño del Estado.

En ese camino, con el pretexto de "eliminar el déficit fiscal" y acumular reservas en el BCRA (exigencias del FMI para el pago de la deuda), el gobierno avanzó con el congelamiento presupuestario del Estado en un contexto fuertemente inflacionario (licuación) y el recorte de obra pública, jubilaciones, planes sociales, salarios públicos y transferencias a las provincias, entre otros rubros. Además, aplicó una fuerte devaluación en diciembre y estableció un esquema impositivo favorable a la exportación y desfavorable a la importación, generando recesión en el mercado interno y transferencia de recursos hacia los exportadores para promover la liquidación de cosechas y acumular reservas en el corto plazo (90 días, hasta marzo). Los efectos son enormes y se desparraman por toda la economía nacional: independientemente de la caída de la ley ómnibus, el Plan Motosierra ya causó mucho daño.

La eliminación de los subsidios al transporte y la desregulación de tarifas, por ahora parciales, no solamente provoca una suba del precio del boleto que vuelve al transporte un costo insoportable para el sueldo promedio (intendentes calculan un boleto de colectivo estándar en torno a $1.000), sino que también amenaza con desarticular la estructura del transporte público, pues patea el tablero de manera tal que las líneas se verán en la circunstancia de disminuir frecuencias, empeorar la calidad del servicio e incluso cerrar definitivamente, o al menos hasta que el libre mercado "decida" qué otra empresa se hará cargo de movilizar las unidades.

Otro tanto ocurre con los subsidios a la energía y las tarifas de los servicios públicos: el recorte progresivo de subsidios a la luz y el gas y la actualización de las tarifas, proceso que debe aguardar la finalización de las audiencias públicas, generarán serios aumentos que van, en el caso de la electricidad, del 100% al 500% según sean usuarios residenciales o comerciales y su nivel socioeconómico y de consumo eléctrico. Como mínimo, se duplica el monto de la factura. En el caso del gas, el aumento se postergó hasta marzo, pero las empresas reclaman aumentos entre 200% y 500%, según la región y el tipo de consumidor, y actualizar las tarifas mensualmente por inflación. Si bien el gobierno escalonará los aumentos y mantendrá alguna clase de subsidio a los sectores más vulnerables para evitar amparos judiciales y "suavizar" el impacto en el bolsillo, lo cierto es que Milei se apresta para cumplir con la exigencia del FMI de eliminar subsidios estatales por un 0,5% del PBI en 2024, aun a costa de aplastar el bolsillo de las familias trabajadoras, hospitales y universidades y pequeños comercios, entre otros.

Respecto al recorte de la obra pública, en el largo plazo significa un vaciamiento de la infraestructura productiva y comercial del país, mientras que en lo inmediato las cámaras de la construcción anunciaron que a partir de marzo comenzarán a despedir personal de manera masiva. La paralización de 3.200 obras puso en riesgo 200.000 puestos de trabajo (un 40% del total del sector) y amenaza con llevar a la quiebra a las pequeñas y medianas empresas del rubro; no así los grandes jugadores del sector, de inversiones diversificadas.

En la tónica de ajustar presupuesto estatal, varios ministerios subejecutan el presupuesto en los meses de verano, con el caso paradigmático del ministerio de Capital Humano, que suspendió el envío de alimentos a los comedores populares y se niega a atender a sus referentes, a pesar de que alimentan diariamente a unas 9 millones de personas. En lo que va de 2024 la caída de los "gastos" en programas sociales fue del 41% (Perfil, 8/2). Los salarios del sector público nacional no solamente tuvieron un magro aumento en enero (15%), sino que recientemente se estableció una suerte de congelamiento (los salarios subirán solo en la medida de las posibilidades del presupuesto de cada organismo o entidad) y el arbitraje de las paritarias por parte de una "comisión técnica", un eufemismo para indicar que el gobierno como empleador no admitirá aumentos que cubran la inflación.

El caso de los jubilados estuvo en discusión durante el tratamiento de la ley ómnibus, cuya caída puso en pausa el recálculo de haberes y la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, los dos puntos principales del debate. En principio, de no haber cambios los haberes se actualizarán en marzo con la vieja fórmula, pero el gobierno insistirá en obtener un "ahorro fiscal" en las cuentas del Estado mediante la disminución real de las jubilaciones en torno al 1% del PBI, conforme las exigencias del FMI. Mientras tanto, ese "ahorro" se produce de facto porque la inflación está descontrolada y los haberes no fueron actualizados ni complementados con bonos suficientes que permitan mantener su poder adquisitivo: el recorte del gasto fue del 43% (Perfil, 8/2).

Al respecto, la inflación sigue siendo la protagonista: después del 25% de diciembre, y al cierre de esta edición, la inflación se calcula en 22% para enero, concentrada especialmente en artículos de primera necesidad (alimentos +60%, limpieza +40%), los medicamentos llevan casi 100% de aumento contando desde noviembre, y las ventas de productos industriales retrocedieron un 60% en enero. Sin embargo, la inflación no es simplemente una cuestión de suba de costos operativos o de precios de los insumos importados: la derogación de decenas de normas regulatorias (Góndolas, Abastecimiento, Compre Argentino, SiFRE / SiPRE, Precios Cuidados, Precios Justos, etc.) habilitaron la remarcación arbitraria de precios en el sector privado y muchas empresas multinacionales venden sus productos en Argentina hasta un 40% más caro que en el exterior. En otras palabras, una parte de la inflación es el mero abuso empresarial, el deseo de lucro.

La escalada de precios viene acompañada de una caída del salario real, pues el plan del gobierno es usar el salario como variable de ajuste, como "ancla" para enfriar la economía. Con excepción de los gremios más poderosos, los acuerdos de aumento giraron entre 15% y 25%, pero la distancia entre el salto inflacionario (diciembre-enero) y el cobro de los salarios (febrero), y la continuidad de una alta inflación (enero aprox. +22%) impiden la recuperación del poder adquisitivo. Al final, el ajuste lo pagan quienes viven de su trabajo y con un ingreso en pesos.

La combinación de la inflación con salarios atrasados provocó una caída del consumo minorista (-28%, según CAME) y en supermercados (-12%) durante enero, especialmente electrodomésticos y bazar. En ese sentido, un estudio mostró que la mitad de las familias del país se encuentra endeudada y utilizando sus ahorros para financiar gastos cotidianos (especialmente a partir de enero) e incluso restringe la compra de alimentos (Clarín, 3/2). Y no se trata de la población desocupada, que ciertamente se lleva la peor parte, pues tener empleo ya no es garantía de llegar a fin de mes: con Milei se profundiza una tendencia ya existente, la de los trabajadores pobres.

Ahora bien, a partir de diciembre al salto inflacionario, la caída del salario y la retracción del consumo se le suma el estancamiento económico (recesión), para dar lugar a un escenario de estanflación: los precios siguen subiendo pero la actividad económica disminuye, con menos producción, venta y consumo de bienes y servicios y, por ende, menos empleo. La OCDE prevé una inflación del 250% y una recesión de -2,3% del PBI para 2024, mientras que el FMI calcula la caída en -2,8%. Ese fenómeno ya es notorio en la recaudación impositiva (Infobae, 7/2) y de sostenerse en el tiempo, se transforma en suspensiones y despidos, pues las empresas notan el escenario y priorizan sus ganancias por sobre las necesidades de las familias obreras.

Finalmente, respecto a las reservas del BCRA, el gobierno se jacta de estar acumulando dólares, pero ese crecimiento se basa en la devaluación extraordinaria de diciembre ("dólar caro") que promovió las exportaciones y limitó las importaciones, pero se va frenando porque esa devaluación -sumada a la ofensiva remarcadora de las empresas- se trasladó a precios: cada mes la inflación (+25%) avanza más rápido que la devaluación (+2%) y por ende el dólar se vuelve más barato, anulando ese mecanismo artificial y de corto plazo que implementó Caputo. Se calcula que dólar e inflación convergen en marzo y el gobierno se vería obligado a devaluar nuevamente sin haber controlado los precios, lo cual abre la posibilidad a una espiral inflacionaria.

Por otro lado, durante 2024 el país afrontará pagos al FMI por USD 7.300 entre capital e intereses, más de un tercio vence a fines de marzo. Por ello, a principios de febrero el FMI aprobó el desembolso de USD 4.700 millones para que el gobierno pague los vencimientos de deuda de diciembre-enero-abril y evitar un *default*. Si bien resta ver qué sucede a partir de abril, tal desembolso -sumado al informe publicado por el organismo- constituye un respaldo político a Milei, pues las metas del Acuerdo (cuyo cumplimiento es condición para recibir los desembolsos periódicos) no habían sido alcanzadas y, además, se trata de un adelanto de dinero que debía desembolsarse recién en los siguientes meses. A cambio, el gobierno se comprometió a alcanzar un superávit primario (una diferencia positiva entre la recaudación y los gastos del Estado, sin contar pagos de deuda) del 2% del PBI y USD 10.000 M de Reservas BCRA en 2024, para lo cual aplica un ajuste brutal sobre las cuentas públicas. El motivo del apoyo está en la naturaleza ortodoxa y neoliberal del programa económico del gobierno: es exactamente lo que pide el FMI, pero más agresivo (P12, 1/2). El propio FMI señala que el ajuste de Milei está entre los más profundos y acelerados de la historia mundial. En nuestro país estos planes no solamente hicieron mucho daño, sino que también tendieron a fracasar en el mediano plazo, produciendo luego escenarios de crisis mucho más profundos.

Tanto el organismo como el gobierno son conscientes de que el Plan Motosierra se trata de una destrucción planificada de la economía nacional. De la vereda de enfrente, la clase trabajadora y los sectores populares debemos tomar consciencia de lo mismo, y poner todo nuestro empeño en montar un plan de lucha para evitarlo. La moneda está en el aire.

David Paz

Derrotar el ajuste de Milei y su casta

Los primeros meses de la gestión Milei van arrojando resultados contundentes. Según el INDEC, en diciembre el salario perdió un 13% de poder de compra, más del doble de toda la caída de 2023, que acumulada llega a un 19%. No es para menos con una inflación que el último mes del año pasado llegó a 25,5% y que en enero está calculada aproximadamente en 22%. El gobierno presentó los números de inflación como un logro, echando las culpas sobre la gestión anterior. Al mismo tiempo impulsó un tarifazo brutal en el transporte público y se viene lo mismo para los servicios.

El programa de ajuste implacable sobre los trabajadores y el pueblo está en marcha. El tema es que para sostener semejante ataque a las condiciones de vida de las masas hay que tener mucha espalda política. Pero el envión de aquel 56% del balotaje y la apelación constante a lo malo que fue el gobierno de Fernández se va diluyendo con el correr de los días.

Sin ley

El gobierno encaró con prepotencia sus primeros meses de gestión. Pretendió imponer fuertes cambios en distintos temas con el DNU. La impugnación judicial de varios de sus artículos marca que por arriba le van poniendo límites a la bravuconada libertaria.

Sin dudas el tema principal fue el revés sufrido con la "ley ómnibus". El rechazo por parte de una oposición que en ningún momento escondió su vocación colaboracionista fue un cachetazo que desnuda al gobierno en toda su debilidad. Por más que ahora Milei salga a ningunear al Congreso diciendo que el ejecutivo no va a presentar más proyectos de ley, no hay margen para una salida "a la peruana", tratando de cerrar el parlamento: no le da la fuerza para una aventura semejante. Para colmo, sus diputados más fundamentalistas impulsan la presentación para derogar el derecho al aborto legal, sin el visto bueno del gobierno: descontrol en la tropa propia.

El rechazo a la ley resquebrajó los puntos de apoyo en que se venía recostando LLA. Ya salieron eyectados Osvaldo Giordano de la dirección de la ANSES -hombre del peronismo cordobés- y la secretaria de energía Flavia Royón, quien había llegado de la mano del gobernador peronista de Salta. Dobla la apuesta el gobierno al no girar el fondo de incentivo docente -fundamental para pagar los sueldos en las provincias- y sobre todo con la eliminación del fondo compensador para el subsidio al transporte. Audacia o torpeza, estas medidas tienden a unificar a gobernadores que no necesariamente tenían intereses en común, al tiempo que rompe lanzas con las fuerzas dialoguistas. Patricia Bullrich fue la encargada de hacer

público el plan b: un rescate macrista del gobierno, sobre la base de copar el gabinete expulsando a los que tienden lazos con el peronismo.

Más allá de la defensa que hicieron los gobernadores de las fuentes de financiamiento para sus provincias, esta pelea muestra la agudización de las disputas entre las distintas fracciones de la gran burguesía, en donde ningún sector quiere ceder nada.

La disputa por la calle

La magnitud del ataque a las masas que impulsa el gobierno solo es viable sobre la base de una represión de mayor escala, no solo en sus métodos sino sobre todo en sus objetivos: disputar -y ganar- los centros políticos.

En ocasión de los tres días de manifestación frente al Congreso, Patricia Bullrich tuvo su primer ensayo represivo en escala, con cuatro fuerzas federales interviniendo de conjunto para disputar el control de la calle. Si bien la represión no fue feroz, fue una demostración del poder de las fuerzas desplegadas, que lograron sus objetivos inmediatos, ya fueran despejar la calle, obligar a los manifestantes a retroceder o directamente dispersarlos.

Pero en relación a todo este despliegue, el resultado político fue magro. La izquierda, con una movilización cuantitativamente muy inferior a la que semanas antes había encabezado la CGT, logró poner un eje y terciar en la pelea contra la ley ómnibus. Primero desafiando el protocolo, que demostró que no persigue garantizar el tránsito sino reprimir a la protesta. Luego, sosteniendo la iniciativa durante tres días, concentrando a un nutrido activismo independiente agrupado en las asambleas y desnudando la inconsistencia de quienes faltaron a la cita: el silencio de las centrales obreras fue ruidoso, pero también hizo ruido la actitud timorata de fuerzas como MTE, Ate Capital, etc., que hicieron todo lo posible por no confluir con la izquierda, principalmente en el momento que había que enfrentar la represión. Por último, las imágenes de los enfrentamientos en la plaza y de los desbordes represivos desproporcionados, lejos de ofrecer una imagen de solidez del gobierno, acompañaron al caos que se vivió dentro del recinto. La movilización no pudo sostener una pelea de igual a igual contra la represión: hay que tomar nota de esto, pero sobre la base de que sí se llevó una victoria política. Una situación similar a la que se vivió el 20 de diciembre.

Intervenir en lo que viene

El paro con movilización de la CGT del 24 de enero aportó masividad a la pelea contra el plan de Milei. Aun con un impulso a media máquina, mostró la capacidad de intervención del sector de los trabajadores al cual dirigen, poniendo sobre la mesa a la movilización popular como un factor de la actual crisis política. La conducta en los días posteriores, sobre todo durante el tratamiento de la ley ómnibus, muestra que la burocracia sindical no quiere liderar la pelea contra el ajuste.

La movilización de la izquierda aportó confrontación. Medida, pero confrontación al fin. Fue muy importante desafiar el protocolo de Bullrich: sin ese elemento, la concentración en la plaza del Congreso hubiera pasado sin pena ni gloria. Se repitió de alguna forma el esquema del 20 de diciembre. Si en aquella oportunidad la marcha a Plaza de Mayo incentivó los cacerolazos, esta vez la iniciativa de la vanguardia organizada principalmente en partidos y movimientos de izquierda volvió a poner un eje.

Al mismo tiempo germina una nueva camada de luchadores que se agrupa en las asambleas barriales, que en la confluencia con la militancia organizada está haciendo su primera experiencia de deliberación, de movilización, de acompañamiento de las luchas populares e incluso de enfrentamiento a la represión.

Otro de los ejes de estos días viene siendo el tema del hambre, ante la reticencia del gobierno en hacer llegar alimentos a los comedores. La movilización de la UTEP al ministerio de Capital Humano, si bien paralelizó la pelea contra la ley, tuvo el acierto de poner el blanco en la ministra Pettovello. Ese guante lo recogió el Frente de Lucha piquetero con una importante movilización en varios puntos del país.

Al tema del hambre se le va a sumar el de las paritarias, sobre todo después de la reunión del Consejo del Salario y en el marco de los ataques a estatales y de la quita de fondos para el pago a docentes. Las clases en las universidades van a comenzar en un contexto de reducción del presupuesto educativo. En ese clima se van a plantear los tarifazos a los servicios, en donde las audiencias públicas, que son un saludo a la bandera, pueden transformarse en un blanco de denuncia si la movilización se dirige hacia ahí.

En todos los casos, es importante organizar y hacer confluir al activismo con trayectoria y al que se suma ahora, impulsando una experiencia de lucha que debe tener en cuenta la velocidad con que se desarrolla la crisis. Y a mayor crisis, mayor audacia debe haber en la propuesta.

La intervención en los conflictos va a abonar a que en los próximos escenarios centrales haya una presencia popular más robusta, que se apoye en los sectores con iniciativa y que desde ahí convoque al masivo, trabajando hacia el paro activo y piquetero y apostando por una confluencia que aporte a dejar atrás las vacilaciones: hay que proponerse derrotar el ajuste de Milei y su casta.

Los próximos combates llegarán más temprano que tarde. Hay que llegar a ellos con la mayor fuerza de masas posible, sabiendo que es la intervención del combativismo la que puede producir un vuelco en la situación. También hay que llegar con un planteo claro, por lo que cobra importancia el reagrupamiento en base a un programa de fondo, que movilice a las fuerzas antimonopólicas, antiimperialistas, patrióticas y populares para que intervengan con una propuesta de salida, aportando a darle forma a la fuerza social que derrote de una vez a la casta de administradores de este capitalismo dependiente que nos hunde en la miseria.

Agustín Damaso

Una amenaza fascista

Días después del rechazo en Diputados a la ley ómnibus, que se dio en el marco de la importante movilización impulsada por la izquierda, el presidente Milei tuiteó un posteo en el que se puede ver su imagen con la mira roja de Terminator haciendo un juego de palabras con la frase del personaje: "Casta a la vista, baby". En la parte de arriba de tan dantesco cuadro, aparece la mención al dirigente del Polo Obrero Chiquito Belliboni, junto a sindicalistas, gobernadores y diputados nombrados de manera genérica. A través de Belliboni, Milei pretende atacar al conjunto del movimiento piquetero.

El posteo, que de por sí tendría seriedad si lo hiciera un simpatizante anónimo, es completamente inaceptable viniendo del propio presidente de la Nación. Es ni más ni menos que una amenaza fascista; que hoy no tenga la fuerza suficiente para ejecutarla no implica subestimarla ni dejarla pasar. Todas las fuerzas democráticas, populares y defensoras de los DDHH deberían pronunciarse al respecto de manera inequívoca.

A su vez, las bravuconadas de este tenor nos deben tener al conteste de cuál va a ser el calibre de los choques de clase a medida que la crisis se vaya profundizando. Denunciar a los fascistas es correcto, pero con denuncias solas no se los derrota.

Facundo Palacios

Mendoza

Abajo la condena contra Rodríguez

La justicia mendocina condenó al dirigente del Polo Obrero Martín Rodríguez a 2 años y 8 meses de prisión en suspenso. Rodríguez estaba procesado en ocho causas vinculadas con su presencia en distintas movilizaciones. La detención previa a su condena fue realizada en su domicilio, luego de la manifestación de rechazo a la ley ómnibus.

La justicia provincial se valió de la figura de "reiterancia", que es impulsada por el gobierno del radical Cornejo y que Patricia Bullrich quiere imponer en todo el país. Según la "reiterancia", la acumulación de denuncias es motivo suficiente para encarcelar a alguien, aun sin juicio ni condena.

En estas condiciones, Rodríguez se exponía a una prisión preventiva hasta la realización de un juicio en el que la fiscalía podía llegar a pedir 16 años de prisión. La condena a la que finalmente se lo sentenció fue el resultado de un juicio abreviado; por su duración, la misma no es de cumplimiento efectivo, aunque no deja de ser un condicionamiento al compañero y un antecedente en la persecución política.

En Mendoza hay varios compañeros imputados en causas vinculadas a la movilización popular. Es necesario impulsar la más amplia solidaridad para derrotar esta política reaccionaria de Cornejo, luchando por el desprocesamiento y por la caída de las condenas injustas.

Corresponsal

Rosario

En CONICET no sobra nadie

Días después de haberse posicionado primero en las Paso, Milei salió a declarar que iba a cerrar CONICET. Desde ese momento en el organismo comenzó a haber movimientos para organizar la resistencia. Un sector que con Macri se organizó y luchó ante el ajuste sufrido se veía ante un panorama parecido. Esa organización cayó en los años del gobierno de Alberto Fernández, más por una falta de acompañamiento y por tanto intención de los sindicatos que porque el gobierno resuelva alguna de las necesidades del sector.

En los últimos cinco meses la organización se comenzó a construir con asamblea y movilizaciones en favor de la ciencia y la educación pública. En el caso puntual de Rosario las discusiones no se cerraron en un simple ir a votar a Massa, aunque la gran mayoría entendía que esa era la forma de detener de momento a Milei. En parte porque la discusión superó el plano electoral, nos encontramos en los primeros días de enero con nuevas asambleas, algunas movilizaciones y una participación numerosa en el paro del 24/01; a esto se sumó la primera no renovación de contrato, forma en la que están encuadrados los becarios del CONICET y que los obliga a tener que renovar año a año su situación laboral, sin tener una estabilidad.

Todos estos procesos de discusión y movilización llevaron a construir referencias y platear elecciones de delegados en el sector, lo cual les permita tener otra fuerza y respaldo a la hora de seguir resistiendo. Los compañeros de la Corriente Sindical Jorge Weisz se acercaron desde el primer momento a estas asambleas, y desde antes que la cuestión se convulsionara estaban tratando de construir una elección de delegados, enmarcando la importancia de habitar los sindicatos y darle una impronta antiburocrática, combativa y antimperialista. Esto caló con fuerza y en estos momentos se están recorriendo distintos sectores para definir delegados y construir una junta interna de CONICET.

"En CONICET no sobra nadie": la única forma de que esta consigna se pueda sostener es con la lucha en defensa de los compañeros trabajadores de la ciencia. No solo para que no sean despedidos, sino para desde esa primera victoria avanzar por la lucha de sus derechos.

Corresponsal

ALFREDO JORGE LIPNIZKY
Militante de TUPAC en Capital Federal. Secuestrado el 2 de febrero de 1977 en la fábrica donde trabajaba.

GUILLERMO HORACIO WHITE
Activista del Frigorífico Swift de Rosario. Secuestrado el 10 de febrero de 1977 en Santa Fe.

HUGO OSCAR SÁNCHEZ VIZCAYADA
Secuestrado el 14 de febrero de 1978 en su domicilio. Desaparecido en El Vesubio.

MARÍA CRISTINA MORALEJO RODRÍGUEZ
Delegada del Sindicato de Trabajadores de la Sanidad de Quilmes. Secuestrada el 14 de febrero de 1978.

¡PRESENTES!

Quita de subsidios, represalia para el pueblo

Luego de que el martes cayera "la ley ómnibus" surgieron distintas versiones de si fue preparado o torpezas del propio gobierno nacional. Lo que quedó claro es que fue una derrota política, que le pone el primer golpe considerable a un gobierno que salió a la carga contra el pueblo y en beneficio de los monopolios y banqueros.

Redoblando la apuesta el jueves nos enteramos de que el gobierno nacional quitó los subsidios a transporte de todo el interior del país, al eliminar el Fondo Compensador al Interior, compuesto por dinero del Estado nacional destinado a sostener las tarifas de los colectivos, dejando la responsabilidad exclusiva en provincias y municipios. El día anterior había subido en el AMBA un 200% el boleto, con el argumento de que en esos lugares se pagaba mucho menos que en el interior donde los boletos rondan por arriba de los $300 en promedio. Con la quita de los subsidios a las provincias, los cálculos que intendentes y distintos actores del sector salieron rápidamente a blanquear es que el boleto pasaría a $1.000. Un golpe directo a los trabajadores, estudiantes y jubilados que son quienes más utilizan los medios de transporte, en la mayoría de los casos para ir a trabajar o estudiar.

Esta medida sale sin aviso previo a las provincias y dando a entender que es un castigo, sobre todo a los gobernadores de Santa Fe y de Córdoba por no acompañar la ley con sus diputados. En el caso del gobernador Pullaro de Santa Fe, primera y torpemente salió a decir que no va a ayudar a los municipios; luego con dos de las ciudades más grandes de la provincia y del país al comando de su fuerza (Santa Fe capital y Rosario), dijo que iba a actualizar lo que aporta la provincia en relación a la inflación, lo cual no remplaza el aporte de nación que representaba $1.500 millones por mes, que era una pequeña parte de lo que daba a las provincias: solo el 15% del presupuesto de subsidios en transporte iba a las provincias, el 85% restante iba al AMBA. Cabe preguntarse cuánto falta para que los boletos del AMBA se tengan que parecer a los del interior. Porque claramente en los objetivos de este gobierno no está en que los del interior se parezcan a los del AMBA.

Respecto a las líneas de colectivo, al estar desreguladas por parte del Estado, aquellas que den pérdida o por lo menos que no brinden ganancia acorde a lo que espera el empresario, posiblemente sean dadas de baja, dejando a distintos barrios de la ciudad sin conexión con el resto. Generando muchas complicaciones a la hora de acceder a lugares de trabajo, estudio, etc. Nuevamente el ajuste no lo paga la "casta", nuevamente de las torpezas y peleas de los de arriba es el pueblo trabajador el que sufre las consecuencias, y nuevamente nos encontramos ante dirigentes que están preparados para "contener" el malestar con mucha suerte, y no para solucionarlo.

Siendo Córdoba y Santa Fe dos de las provincias que más aportan a las exportaciones de de nuestro país, ya que el cultivo de soja en los últimos 20 años no paró de prosperar a costa de nuestra salud, bien podrían condicionar con algún impuesto a ese sector para que el trasporte y tantos otros sectores no se vean tan golpeados, o bien en el caso de Santa Fe que tiene en su costa casi la totalidad de los puertos que sacan el 70 % de nuestras exportaciones al mundo, podría cobrarle algún impuesto a esas multinacionales para sobrellevar este momento de crisis. Nada de esto va a suceder ya que esos sectores son los que se benefician con estos gobiernos mediocres que solo hacen sufrir al pueblo.

La salida de esta crisis va a venir de la organización del pueblo en relación a sindicatos, centro de estudiantes, organizaciones sociales, en pos de que las medidas que se tomen para adelante beneficien al pueblo trabajador y no a los monopolios y banqueros. La bronca vinculada a las malas condiciones de vida no para de aumentar vertiginosamente, hay que trabajar la conciencia para marcar a los responsables del problema y cuál es la salida luego de correrlos del medio. Es el primer paso para terminar de derrotar a este gobierno hambreador.

Eldán

CABA

La odisea de alquilar

Consultado por la derogación de la ley de alquileres, un desarrollador inmobiliario de nombre Gustavo Ortolá declaró lo siguiente a un medio periodístico: "Desde la derogación solo hay buenas noticias". Se nota que este argentino de bien no tiene que pagar un alquiler.
El DNU anunciado el 20 de diciembre derogó la ley de alquileres, una norma que si bien había fracasado en el objetivo de hacer más accesible la posibilidad de alquilar, mínimamente establecía ciertas pautas. La desregulación que se plantea ahora volvió todavía más leonino al mercado inmobiliario, al flexibilizar la duración de los contratos, los intervalos de las actualizaciones e incluso la moneda en que se pactan las operaciones. En la CABA, de unos 10.000 inmuebles ofrecidos en portales de internet, la mitad están publicados en dólares.

Hoy en día, el alquiler de un dos ambientes (calculado en 40m2) en la Ciudad oscila entre los $360.000 y los $260.000, según el barrio. Esto en un contexto en que el salario mínimo está en $156.000: si el Consejo del Salario Mínimo -a reunirse al cierre de esta edición- aceptara la propuesta de la CGT de aumento del 85%, alcanzaría para alquilar en Barracas o Villa Riachuelo y para comer de vez en cuando.

Una persona o familia que quisiera mudarse necesitará para el ingreso al inmueble aproximadamente tres veces el valor del alquiler. Según la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios, "Supongamos un contrato de $300.000 al mes. Para un alquiler en CABA, el inquilino deberá desembolsar al ingreso no menos de $900.000, este monto abarca el mes de anticipo, el depósito, las certificaciones notariales y, en caso de contratar un seguro de caución, se agregarían otros $300.000 o más" (Infobae, 7/02/24).

La duración de los contratos tiende a variar entre 1 y 2 años. Al finalizar el contrato el propietario podrá subir el precio sin restricciones, con la incertidumbre que ello genera en el inquilino. Las actualizaciones van de los 3 a los 6 meses. También son problemáticas, ya que acompañan el ritmo de la inflación. Para graficarlo: si alguien firmó un contrato en enero por $200.000 a actualizar en 3 meses, a este ritmo de inflación en abril estará pagando no menos de $320.000, que se sumarán a los aumentos en expensas, servicios y demás yerbas tales como transporte, alimentos, etc.

Para justificar este descalabro se suele invocar el derecho de los propietarios a obtener ganancias por sus inmuebles. En este punto es importante diferenciar la situación de un pequeño rentista, poseedor de un inmueble para alquilar, de los grandes jugadores que son los que ponen las condiciones: las sociedades anónimas que controlan la cadena desde la construcción hasta la comercialización, y los grandes propietarios poseedores de varios inmuebles.

Dejando claro qué intereses representa, el año pasado el gobierno porteño lanzó una serie de medidas para facilitar el alquiler: básicamente exenciones impositivas para quienes ofrecieran su propiedad en el mercado y créditos para quienes necesitaran acceder a garantías, que son ofrecidas, justamente por… inmobiliarias. Todo esto, en el marco de que comprar una casa propia, para una familia trabajadora que no recibe una herencia, es sencillamente imposible. Del crédito hipotecario para la casa propia al crédito para alquilar.

Según los datos del último censo nacional, en todo el país hay 46 millones de habitantes y 18 millones de viviendas. La organización Inquilinos Agrupados plantea que, a 3 personas por vivienda, estarían sobrando 3 millones de viviendas. No se trata entonces de que falten inmuebles; menos aun en una ciudad en donde la construcción de edificios prolifera de manera descontrolada, saltando las regulaciones de los códigos urbanísticos de cada barrio. Hay cada vez más departamentos y los precios de los alquileres no paran de subir. ¿Y la ley de oferta y demanda? El buen Adam Smith llora en su tumba.

A la especulación de las grandes empresas que vuelcan sus ganancias -las legales y las otras- en la construcción de viviendas, hay que agregar el tema de los alquileres turísticos, que desvían gran parte de la oferta hacia un mercado ultraflexibilizado en términos de plazos y tarifas. Según datos de mediados del año pasado, había en la plataforma Airbnb unos 26.000 inmuebles en alquiler, de los cuales solo 559 estaban inscriptos en el registro oficial del gobierno de la Ciudad, lo cual se supone que es obligatorio.

Las agrupaciones de inquilinos vienen planteando esta problemática, orientando su pelea principalmente a una regulación legal que haga más accesible la posibilidad de alquilar. Desde ya que se trata de un reclamo justo. Pero en un mercado hiperconcentrado, controlado por grandes jugadores que ponen condiciones leoninas, las regulaciones legales tienen patas cortas. Una verdadera reforma urbana tiene que partir de poner el derecho a la vivienda por sobre el derecho a la propiedad, planteando impuestos para la vivienda ociosa pero sobre todo expropiando a los especuladores y controlando desde el Estado la construcción de viviendas con el objetivo de alojar familias y no de perseguir el lucro: un programa de esta naturaleza solo es posible de ser aplicado sobre la base de derrotar a quienes gobiernan en favor de la propiedad monopólica.

Valeria Casas

Jornada piquetera del Frente de Lucha

El 8 de febrero las organizaciones del Frente de Lucha piquetero protagonizaron una jornada nacional que tuvo como centro la concentración al pie del Puente Pueyrredón, en el partido de Avellaneda. La CUBa-MTR fue parte de la movida en varias provincias del país.

La medida fue impulsada para reclamar por la falta de alimentos a los comedores populares, cuya provisión fue cortada desde la asunción del gobierno de Milei.

Este ajuste sobre los más humildes pretende ser enmascarado por el gobierno como parte de su "lucha contra la casta". Así, ante una manifestación impulsada por la UTEP días atrás, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello planteó de manera provocadora que no iba a atender representantes sino a "la gente". Al día siguiente de la bravuconada, la ministra se negó a recibir a las personas que se movilizaron para entrevistarse con ella, que formaron una fila de 20 cuadras.

Con ese nivel de cinismo pretenden estigmatizar el derecho que tienen los más humildes de organizarse por sus reclamos. Derecho a la organización que también atacan amenazando con dar de baja los planes de quienes se movilicen. A pesar del miedo que quieren instalar en los barrios, la jornada movilizó a miles de compañeras y compañeros en distintos puntos, muchos de los cuales se habían movilizado la semana anterior en rechazo a la "ley ómnibus".

Como era de esperar, la ministra Bullrich hizo su despliegue de fuerzas federales, violentando incluso los términos de su propio protocolo, ya que la manifestación no estaba cortando ningún acceso federal, siendo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires. Volvió a quedar claro que el único objetivo de este protocolo es reprimir a quienes protestan contra el gobierno.

En simultáneo que se desarrollan estas protestas, el gobierno acordó con representantes del evangelismo, firmando convenios de asistencia alimentaria con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (Aciera) por $177.500.000. Frente al previsible pataleo que ello generó en la Iglesia Católica, el gobierno renovó un acuerdo con Cáritas por $310 millones. El problema, entonces, no es que "no hay plata" ni "los representantes", sino el proyecto en el que se organizan los pobres.

Los aumentos en la Asignación Universal por Hijo y los montos de la Tarjeta Alimentar no llegan a cubrir la brutal escalada inflacionaria de los últimos meses, por lo que la entrega de alimentos sigue siendo imprescindible. Los beneficiarios del Potenciar Trabajo no llegan a cubrir las necesidades alimentarias de sus familias en este contexto económico. La pelea contra el hambre está a la orden del día.

La lucha por los alimentos es una demanda que necesita respuesta urgente. Es a su vez un eje que golpea contra la política de ajuste contra el pueblo, que es lo que unifica al conjunto de los trabajadores ocupados y desocupados, junto a jubilados, estudiantes y el resto de los sectores del pueblo, expresiones que es necesario unificar en un programa común antimonopólico, antiimperialista, patriótico y popular que sirva para organizar la lucha hasta derrotar a este gobierno de hambre y entrega.

Matías Maidana

No al desfinanciamiento de SEDRONAR

Compartimos la declaración realizada por trabajadores del sector organizados en la Corriente Sindical Jorge Weisz de Santa Fe

El área por excelencia en abordajes de consumos problemáticos y salud mental está siendo vaciada y peligra la continuidad laboral de 1.500 trabajadores. La desvalorización institucional de este organismo refleja el entramado político, económico y social del modelo productivo argentino.

En Rosario existe un solo espacio de abordaje y prevención de consumos problemáticos con presencia pública de municipio, provincia y nación, pero sin financiar el área no hay verdadera presencia. Cada cambio de gestión nacional reaviva la inseguridad sobre la continuidad laboral e institucional, porque el 70% de los trabajadores no tienen contratos, sino becas precarizantes y empobrecedoras de una suma de $106.000, muy por debajo de la línea para no ser considerado pobre.

Si ningún gobierno se responsabiliza de brindar garantías laborales, lo que se pone en riesgo es la continuidad del espacio para los jóvenes del barrio. En los barrios rosarinos el narcotráfico regula el comercio y consumo de drogas adictivas, adulteradas y de baja calidad con muy bajo costo, desde el narcomenudeo. Las políticas de prevención de las instituciones públicas generan alternativas frente a un circuito que seduce a los jóvenes con recompensas económicas y ofertas de sustancias.

Pero el problema es más profundo. La falta de ofertas estables y dignas de empleo formal es una realidad que empuja a los jóvenes a mercados informales e ilegales, donde realizan tareas con riesgo de vida, a cambio de sustancias y un pago incluso más alto que el de los propios trabajadores de estos dispositivos orientados a reducir los daños del consumo.

La falta de prioridad, inversión y presencia estatal genera un vacío que ocupa el narcomenudeo. Este configura la forma de habitar el barrio. "Durante el día el barrio es de los vecinos, pero durante la noche es otro lugar". Desde temprana edad las familias del barrio son testigos de balaceras, se cuentan los familiares presos o asesinados por hechos vinculados al narcomenudeo (cuadriplicando la tasa nacional de homicidios), y son también desalojadas para implantar bunkers. Este alto grado de violencia y delitos vinculados al comercio y consumo configura también una visión particular del mundo.

Hay registros de niños que a los 9 años les enseñan a ensamblar armas, practicar tiro y "campanear" esquinas por si "cae" la policía u otros. La coerción se amplía con el consumo temprano de marihuana y en particular de antidepresivos y cocaína fumara (pipeo) que generan deterioro cognitivo y aumenta el riesgo de dependencia.

En los años 60 la juventud fue el motor del cambio social que llego a echar dictaduras. Hoy el 40% de la población carcelaria provincial tiene de 21 a 30 años, sin condenas y, gran parte, por delitos menores no dolosos y tenencia. Si no es "la parka es la yuta": la policía garantiza el libre circuito de drogas mediante coimas, pero controla a jóvenes con cacheos constantes, control de identidad y demoras.

¿Pero cómo llegan estas sustancias a los barrios que terminan luego por configurar toda una estructura económica, comercial, laboral, cultural y social?

Esto está vinculado al cambio sustancial que se produjo en los 90´ en la cual se profundizó la dependencia extranjera y la entrega de soberanía al tomar deu-

das y conceder derechos de explotación y control de recursos estratégicos.

La violencia del barrio tiene su correlato con el control del Rio Paraná. El rio, mal llamado "hidrovía", es la vía de transporte fluvial por el cual salen el 75% de las exportaciones de nuestro país al exterior. Pero ¿Qué tiene que ver eso con las balaceras en escuelas y plazas, pibes asesinados y problemas de consumo?

Quien maneja el Río maneja lo que circula: En 2022 capturaron 1.434 kg de cocaína en Brasil y Holanda en cargamentos provenientes de las terminales portuarias bajo la concesión del grupo Vicentín. El rio está en mano de los monopolios locales y el imperialismo.

Un ejercicio soberano sobre el Paraná implicaría controlar y usar los excedentes económicos para planificar y elevar rápidamente el nivel de bienestar de nuestro pueblo. El control estatal sobre el río permitiría desarticular las vías de ingreso de sustancias, que los problemas derivados del consumo sean abordados por instituciones con presupuestos sustentables y trabajadores estables. Y que el control de la actividad portuaria permita ampliar el trabajo formal para desbaratar la narco oferta.

Para prevenir, reducir daños y garantizar niveles de vida realmente dignos necesitamos la aplicación de un programa político antiimperialista y antimonopólico que retome el control estatal de las finanzas, el comercio exterior y de los recursos naturales. Soberano, que financie la industria nacional y las pymes, impulsando la creación de empleo formal y de valor agregado frente a una economía reprimarizada. Popular, que suspenda el pago de las deudas ilegitimas y fraudulentas como la del FMI, usando ese dinero para vivienda, salud, educación y servicios públicos de calidad.

El desafío entonces frente al desguace de las palancas del estado es el de vincular la voluntad de entrega y profundización del saqueo por parte del actual gobierno nacional. Cada lucha contra los cierres y despidos, así como cada una de las discusiones salariales, debe enmarcarse en esta puja por donde dos modelos completamente de país se disputan. En ese camino, tanto en SEDRONAR, CONICET y otros espacios que actualmente se encuentran atacados, nos fortalecemos junto al resto de los sectores populares que queremos vivir mejor y peleamos por una salida patriótica, popular y antiimperialista a la crisis que cada día se acelera.

Estatales Córdoba

Enfrentar el ajuste y la precarización

En consonancia con la política de ajuste Milei, a poco de asumir como gobernador de la Provincia de Córdoba, Llaryora comenzó su gestión lanzando una serie de medidas que impactan directamente en la situación salarial y en las condiciones de trabajo de las y los trabajadores estatales, a la vez que dio inicio a la implementación de un conjunto de reformas en el Estado provincial que afectan de lleno a los sectores de salud y educación.

Llaryora se jacta de que Córdoba es una de las pocas provincias que cuenta con superávit fiscal; sin embargo, y en sintonía con la política del gobierno nacional, asegura que es necesario hacer un ajuste para reducir el gasto público. Así las cosas, el 27 de diciembre, luego de una sesión fallida por falta de quórum, la Legislatura aprobó una ley que dispone el aumento de los aportes a la Caja de Jubilaciones y a la obra social Apross. Ya en las liquidaciones de enero, los trabajadores estatales se encontraron en sus recibos con aumentos de aportes personales a la Caja retroactivos a diciembre en un 2% (con posibilidad de extenderlo a 4%) y un 1% para el Apross, junto con un extra en concepto de "enfermedades catastróficas" (0,8%). En palabras del gobernador en el inicio de sesiones legislativas del 1° de febrero: *"el esfuerzo recayó en los activos para ayudar a los jubilados".*

Pero además de este recorte salarial, en el marco de la crisis económica y el aumento de la inflación, el gobierno provincial desconoció los acuerdos paritarios firmados por el propio Schiaretti que implicaban aumentos por cláusula gatillo para equiparar la inflación y una nueva mesa de negociación en febrero. En su lugar, el ejecutivo provincial ofreció una propuesta trimestral que deja a las y los trabajadores estatales más cerca de la línea de indigencia y consolida una nueva pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Este acuerdo fue aceptado sin más por la mayoría de los sindicatos estatales, excepto por el gremio docente UEPC. Sin embargo, con una nueva campaña de desprestigio hacia los trabajadores de la educación, en la cual el gobernador llamó a apelar al "sentido común", se dio de manera unilateral el aumento del 14,6% frente a la inflación de diciembre de un 25,5%. Ésta es una medida que rompe cualquier posibilidad de negociación entre el gobierno y los docentes. Es así como Llaryora, mientras se ha mostrado como un "dialoguista" con el gobierno nacional, decide confrontar los trabajadores estatales de la provincia.

Reforma laboral docente y precarización laboral de estatales

Lo salarial implica solo un aspecto del ajuste que se pretende hacer recaer sobre los trabajadores estatales y el sector público. Desde su asunción y particularmente en el discurso de inicio de sesiones, el gobernador viene enfatizando en implementar un conjunto de reformas en la salud y educación públicas. El "cambio de paradigma" que plantea el gobierno, lejos de garantizar mayor acceso, calidad y asignación de recursos a estos sectores, lo que busca es la descentralización, el desfinanciamiento y una mayor precarización de los empleados públicos basado en criterios de "productividad y eficiencia".

Ya en los primeros días de gestión se dieron de baja a cientos de contratados, monotributistas y becarios de diferentes dependencias de la provincia, de los cuales han sido reincorporados una parte, más que por acciones del Sindicato Empleados Públicos, por la desprolijidad de cesantear a personas que se encontraban situaciones de licencias de maternidad y de salud justificadas. Junto con el intento de avanzar en recortes de personal, particularmente en salud, se está implementando una política de descentralización y "empoderamiento" de los 42 hospitales provinciales y sus direcciones, otorgando la posibilidad de

contratación directa de personal y de servicios privados, y un mayor control de ausentismo y productividad.

En el ámbito educativo la situación es similar. Ya fue incorporado a la liquidación de haberes el ítem de "profesionalidad docente", que comprende una suma fija y fuera del básico en concepto de presentismo, mientras que también el gobierno avanzó con la implementación del Decreto N°43 que habilita el doble cargo para inicial y primaria, permitiendo así una duplicación en la carga laboral para que la docencia llegue a fin de mes y encima en carácter de interinato, con fecha de finalización en diciembre. Además, en las postrimerías de la vuelta a las escuelas, el Ministerio de Educación plantea jornadas de taller para toda la planta docente de educación media, bajo el título "La escuela posible" como puntapié para la modificación de los diseños curriculares y la descentralización del sistema educativo. Con un vocabulario teñido por conceptos de *innovación, eficiencia, desafíos y valoración de la cultura institucional,* este documento omite cuestiones centrales que atraviesan la realidad educativa: las condiciones en las que se enseña y aprende, los niveles de violencia presentes en las aulas, la crítica situación económica y social de niños, niñas y jóvenes, los preocupantes niveles de alfabetización y lecto-comprensión, entre los principales.

En suma, un conjunto de políticas públicas que bajo el discurso de eficiencia y productividad pretenden por un lado, avanzar en la precarización y ajuste a los trabajadores del Estado, y por el otro descentralizar y desfinanciar a la salud y educación públicas. Queda en manos de los trabajadores defender los puestos y las condiciones de trabajo, torciéndole el brazo a Llaryora por aumentos salariales que mínimamente cubran la Canasta Básica. Esta pelea necesariamente debe darse en unidad y a pesar de la docilidad de las conducciones sindicales de la provincia. De cara a febrero, la docencia en particular, con la UEPC Capital a la cabeza, tiene la posibilidad de ser impulsora de un plan de lucha con el no inicio de clases, buscando confluir con estudiantes y familias y el resto de trabajadores del Estado por educación y salud públicas al servicio del pueblo.

Marilyn T.

Contra los despidos en Bridgestone

A fines del mes pasado, la multinacional del neumático Bridgestone despidió a 50 trabajadores de su planta de Llavallol, en el sur del Conurbano bonaerense. Este ataque se da en el marco de las discusiones que vienen impulsando los trabajadores por las condiciones de seguridad e higiene de sus tareas. La empresa pretende aprovechar el contexto del nuevo gobierno para avanzar sobre las condiciones laborales de los trabajadores. La multinacional se excusa en la caída de ventas y en el contexto económico, sin privarse de culpar a los trabajadores y sus luchas por una presunta baja en la productividad. Desde el Sutna le responden señalando que los últimos balances de la empresa arrojaron ganancias.

Además de injustificados, estos despidos son irregulares. Según la Ley Nacional de Empleo, por la cantidad, la empresa debió haber tramitado un procedimiento preventivo de crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, justificando los despidos masivos.

En respuesta a este ataque, el Sutna impulsó paros en la planta los días 1°, 6 y 7 de febrero, cerrando con un acto en la puerta de la fábrica, el cual fue acompañado por organizaciones políticas, sindicales, piqueteras y por asambleas autoconvocadas de distintos puntos de la zona sur.

Hay que pararle la mano a la prepotencia de las grandes patronales, apoyando la lucha de los trabajadores contra los despidos y por sus condiciones de trabajo. Toda la solidaridad con los compañeros del neumático.

Corresponsal

Un año conflictivo en las Universidades Nacionales

El 2024 comenzó agitado en varias universidades nacionales con la amenaza de la imposibilidad del pago de salarios en tiempo y forma. Esto se da luego de que el Banco Central emita una circular en donde se establece el no adelanto de fondos para el pago de haberes por parte del Banco Nación, que servían para mitigar los giros tardíos del Tesoro Nacional. A partir de allí se destapa el tema central en las Universidades Públicas: la falta de presupuesto para el sostenimiento de salarios y el funcionamiento cotidiano.

Así las cosas, la situación financiera es más que alarmante. Al igual que en muchas entidades nacionales, las universidades son uno de los focos del desfinanciamiento que se propone el gobierno de Milei, que busca sostener un presupuesto igual al ejecutado en 2023. Si ya el año pasado veíamos el licuamiento del presupuesto, este año la proyección implica su pulverización. Los trabajadores y trabajadoras universitarias son quienes tienen las de perder: el 90% del presupuesto está destinado a sus salarios. En ese marco, un "no inicio" de las clases luego de las mesas de exámenes, es una posibilidad concreta.

Por arriba el tema no pasa desapercibido. Las estimaciones de los rectores nucleados en el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) es que los fondos alcanzan hasta abril, aunque algunas voces más "alentadoras" apuntan a que podría alcanzar hasta mayo. Estas proyecciones fueron hechas sin contar la quita a los subsidios del precio de la energía eléctrica a hospitales, escuelas y universidades anunciada el pasado 5 de febrero. Una quita que implica el aumento de al menos 210% en las tarifas de luz.

Esta situación les viene como anillo al dedo a aquellos sectores que hace años vienen propiciando el arancelamiento de la universidad pública, los convenios con el sector privado a cambio de fondos económicos y la instalación de cupos en el ingreso a las carreras de grado. Con respecto a este último punto, la Universidad Nacional de Quilmes fue bastante más audaz y anunció que durante el 2024 existirá un cupo de 2 materias cuatrimestrales a los que cada estudiante podrá inscribirse.

Universidades públicas empobrecidas, con laburantes y estudiantes pobres. Esa es la proyección para el 2024. No son simplemente las condiciones de estudio y trabajo en las que se está, es también la situación de los alquileres con precios usureros, de los alimentos con aumentos semanales, del costo de los insumos para poder trabajar o estudiar. En el interior se le suma, el riesgo de la quita de los Boletos Educativos Gratuitos o pases de colectivos, luego de la eliminación de subsidios al transporte.
Se presenta así un cuadro de situación bastante más agudo del que provocó el ultimo estallido universitario nacional en 2018 contra el FMI. Aunque también, a pesar de que las condiciones objetivas están, es cierto que la desarticulación y el vaciamiento político que implicó la virtualidad y que aún hoy trae consecuencias, serán cuestiones que combatir para romper con el adormecimiento del que viene la docencia y fundamentalmente el movimiento estudiantil universitario.

Martina Bas

CABA

Asamblea del CEJVG para profundizar la lucha

Los y las estudiantes de los terciarios de CABA no son indiferentes a las medidas que se vienen tomando por parte del gobierno de Milei: sufren la devaluación y consecuente inflación por las nubes, los sueldos de miseria y ahora los tarifazos. A la vez, son conscientes como docentes en formación que las condiciones laborales de la docencia son cada vez más insostenibles y que eso sería aún peor si la educación pasa a considerarse esencial: que sea esencial para el gobierno no implica más presupuesto, mejores salarios y mejoras edilicias sino que se mantiene todo igual pero la docencia no podría reclamar. Por otro lado, tienen mucha historia de lucha en defensa de la educación pública y la formación docente, por lo que también saben que el protocolo antipiquetes viene a querer frenar cualquier tipo de reclamo con represión.

Es por eso que desde el Centro de Estudiantes del I.S.P Joaquín V. González se impulsó la participación en la movilización del 20/12 que desafió el protocolo de Bullrich, luego también en los cacerolazos que proliferaron, en la movilización y el paro convocado por la CGT y en las movilizaciones al Congreso que enfrentaron la ley ómnibus y la represión. El estudiantado terciario fue parte de estas medidas masivamente, aunque para la mayoría fue necesario autoconvocarse en una asamblea, dado que lamentablemente la Coordinadora de Estudiantes Terciarios -CET-, con mayoría de conducciones de Centros ligados al kirchnerismo, se mantuvo en silencio e inmóvil.

Ahora que abren los Institutos, es fundamental que proliferen las asambleas, para comenzar a organizar la defensa de los terciarios y sumar a los y las ingresantes a la lucha por una educación al servicio de los intereses y necesidades del pueblo.

En ese camino, el miércoles 21/2 se realizarán las asambleas del CEJVG para que siga creciendo la organización en cada profesorado y así también aportar a la coordinación entre todos los institutos terciarios, secundarios y universidades. Es importante que la CET, todos los Centros de Estudiantes y los gremios docentes estén a la altura de la lucha que tenemos que llevar adelante. La tarea es seguir la organización para lograr que así sea.

Jacinta Grey

Aunque la mona se vista de seda...

Ha querido el presidente Milei encontrar un ropaje que vista sus obscuras ideas contrarrevolucionarias, antipatrióticas e inhumanas, con esplendor…

Por un lado, hace gala de un misticismo que lo pondría cerca de dios, y por otro busca la sombra de Alberdi, autor de "Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina", para emular sus "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos".

En lo primero, no sabemos qué tan lejos o cerca pueda estar de dios… De lo que hay constancia es de su buena relación con el sionismo; también con las iglesias evangélicas a quienes ha habilitado importantes sumas de dinero para caridad. En reciente visita al Vaticano abrazó y besó al Papa atestiguando la excelencia de la relación con la Iglesia Católica, pese al reclamo de los obispos argentinos por asistencia alimentaria para millones de empobrecidos argentinos que no comen diariamente. Estas amorosas relaciones dan por cierto que las "fuerzas del cielo" lo estarían acompañando. No sabemos hasta dónde y hasta cuándo…

De lo que sí sabemos es cuán lejos esta del pensamiento de Alberdi, del que mucho se oculta como de tantos patriotas al conocimiento de nuestro pueblo. Las "Bases…" que dieron forma a la Constitución de la Confederación Argentina en 1853 significaron un proyecto político de avanzada de los pueblos de la nación, aspirando a un desarrollo independiente. Este proyecto impulsado por el ala progresista del Partido Federal después del Acuerdo de San Nicolas, venía a oponerse a los intereses portuario-dependientes de los negocios de importación y exportación en manos de una élite comercial ligada a la principal potencia industrial, comercial y financiera de la época: Inglaterra. Los mismos intereses que negaron apoyo y muchas veces sabotearon la guerra de la independencia americana. El presidente Milei, en las antípodas del pensamiento alberdiano, ya ha manifestado su decisión de afianzar la dependencia, haciéndose cargo de pagar la estafa de la deuda externa, abriendo las puertas al capital extractivo internacional, asegurando así la permanencia y rentas de los monopolios y el capital financiero, además de llevar adelante un criminal ajuste que dejará huellas profundas en la salud y educación de una población exprimida hasta su aliento y que ya no da más… Como

Hacia un #8M de lucha en las calles

A un mes del 8 de Marzo, La Libertad Avanza lanzó una nueva provocación al movimiento de mujeres y diversidades, al presentar un proyecto de ley que pretende derogar la ley de Interrupción Legal del Embarazo -IVE-, conquistada a fines del 2020 por la marea verde. La repuesta: organizar un #8M de lucha callejero y masivo en el marco de dar pelea por el paro general.

La LLA viene pregonando su intención de derogar la IVE y constantemente ataca al movimiento de mujeres y diversidades, pero la presentación de este proyecto, un día después de la derrota de la ley ómnibus y la forma en que se llevó a cabo, dejan ver más que nada las desprolijidades, impericias y hasta el descontrol que hay en las filas del gobierno. Al día siguiente de conocerse su presentación, en redes y medios de comunicación comenzaron a entreverse los desentendimientos dentro de la LLA. Resultó que la legisladora Rocío Bonacci dijo no saber que tenía que consultar para hacer una presentación de este tipo y que no había pedido permiso para poner las firmas del resto de los legisladores y legisladoras en el proyecto, entendiendo que bastaba con una charla informal que habían tenido al respecto. Entre las firmas figuran la de Lemoine y Quintar, quienes rápidamente declararon que no habían sido consultados y que sólo habían expresado sus intenciones de apoyar una ley de este estilo, pero que consideraban no era el momento para hacerlo. Desde el Ejecutivo a través de Adorni, comunicaron que la iniciativa era sólo del grupo de legisladores firmantes y hasta legisladores del PRO dijeron estar en contra. En el gobierno andan de acusaciones ante lo que puede ser otro traspié para la LLA ante el mamarracho de esta presentación y porque -aunque al cierre de esta edición no se sabe si este proyecto prosperará a no en el curso legislativo-, la presentación misma provocó un amplio repudio activando a la marea verde de cara al próximo #8M.

Un amplio abanico de organizaciones políticas, sociales, agrupaciones, colectivos feministas y de la cultura entre otras, salimos a declararnos en defensa del aborto legal y contra este proyecto nefasto presentado por la hija de Francisco Bonacci, ex concejal de Santa Fe, hombre cercano a lo más facho de la política como Biondini, Rico y ahora a Milei, que pretende retroceder más de un siglo en materia de derechos humanos. No sólo apunta a derogar la Ley IVE, sino que además va en contra de lo que estaba dictado por el código penal en 1921. Su redacción establece modificar el código penal respecto a los abortos legales negando este derecho a quienes cursen un embarazo forzado producto de una violación o abuso sexual. Sólo permitiría la interrupción en caso de " peligro inminente" para la vida de la mujer. Aumenta las penas para quienes realicen un aborto voluntario y quienes lo asistan y deroga las penas vigentes para funcionarios públicos que obstaculicen la práctica, entre otros puntos regresivos.

A la muerte por abortos clandestinos no volvemos más. Haber conquistado este derecho fue un avance, quedando demostrado que la legalización -al contrario de lo que argumentan sus detractores-, no obliga a nadie a abortar y en cambio permite el acceso al cuidado de la salud de niñas, adolescentes y adultas con capacidad de gestar que desean interrumpir un embarazo. Tras su implementación hay zonas como el AMBA que alcanzaron una reducción de las muertes vinculadas al aborto de un 90%, permitiendo acrecentar la tendencia en la reducción de embarazos no deseados en la adolescencia en un 60%. Igualmente desde que está en vigencia dijimos que a la IVE había que defenderla en la práctica, porque en todo este tiempo y con el aval del Estado, las iglesias no dejaron de intervenir poniendo palos en la rueda para su acceso, como sucede por ejemplo en las provincias del norte. Es por eso que venimos luchando por su aplicación efectiva en todo el país, al igual que con la ESI. Con Milei hay que redoblar el alerta, no solo por sus bravuconadas, sino porque en medio de sus políticas de ajuste, está tendiendo a reforzar el vínculo con las iglesias evangélicas dándoles más control en los barrios a través del financiamiento a sus comedores, atacando a la vez al movimiento piquetero, uno de los protagonistas de la marea verde y de la lucha de los últimos años contra el hambre con miles de mujeres a la cabeza.

No hay que aceptar ninguna provocación por parte de esta derecha recalcitrante. Se vienen las asambleas para organizar el próximo #8M y la tarea es ganar las calles y preparar con ofensiva una gran jornada de lucha que recupere lo mejor de las históricas jornadas de la marea verde y el grito de Ni una Menos. Apostamos para ello a impregnarle la fuerza que desde el 20 de diciembre viene demostrando que a Milei se lo puede enfrentar y ahora. Los ejes para este #8M son defender la conquista de nuestros derechos como el aborto legal, sea que continúe en danza este proyecto o no, a la vez que sumar a la marea verde a la lucha para derrotar el ajuste y la entrega del gobierno, como paso para que el movimiento de mujeres y diversidades de un salto cualitativo en la etapa que se viene. También pelear para tirar abajo el DNU y el protocolo represivo de Bullrich. Tenemos que salir a derrotar el ajuste feroz de Milei y su casta, que nos impacta de manera brutal a las mujeres, quienes somos las más pobres entre los pobres y las más precarizadas en un mercado laboral cada vez más informal. Ante la devaluación y la inflación creciente que se comieron de un saque el ya ajustado ingreso popular, tenemos que dar pelea junto al resto del pueblo trabajador por la suba de salarios, jubilaciones y planes sociales, y frenar cualquier intento de reformas laborales y jubilatorias regresivas, despidos y suspensiones. Sobran motivos para volver a movilizarnos, entre los cuáles también se encuentran los 30 femicidios cometidos en lo que va del año, mientras el gobierno recortó el presupuesto para asistencia en violencia por motivo de género. En este contexto se viene exigiendo desde abajo el llamado al paro general a las centrales sindicales que están corriendo por detrás de una situación política que requiere la intervención urgente y audaz del movimiento obrero y popular. El paro del 24 en líneas generales estuvo bien, pero con una medida aislada no alcanza. De ahí que en el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras y Luchadoras, vamos por aportar nuestra fuerza en la pelea por un nuevo paro general.

Somos parte del movimiento de mujeres y diversidades combativo que los últimos años continuó luchando en las calles contra el ajuste y nuestros derechos, aun cuando la tendencia institucionalista estaba de punta. Que salió el 25 de noviembre diciéndole a Milei que no daremos ni un paso atrás y que movilizó el 30 de diciembre en defensa del aborto legal. Incentivamos a la marea verde para sumarse a la lucha contra la ley ómnibus y seguimos organizándonos para salir con todo el próximo 8 de marzo trabajando por la más amplía unidad y masividad callejera, con todas las organizaciones del campo popular que estén dispuestas a debatir y dar esta pelea. Tenemos el desafío de empapar de esta lucha a la comisión organizadora de Jujuy -sede del próximo Encuentro de Mujeres y Diversidades- para que la misma esté a la altura de los tiempos que corren. Desde cada lugar de trabajo, desde cada barrio con la fuerza piquetera y las asambleas que crecen como en el AMBA y desde cada lugar de estudio, vamos a laburar y preparar actividades para que salga un #8M combativo que aporte a una salida rebelde y popular a la crisis.

Invitamos a seguir los preparativos y novedades del #8M siguiendo el FB de MujeryRebelión

Julia Quinteros

si todo esto fuera poco, la recesión impuesta por el ajuste, como ya ha sucedido en ajustes anteriores del mismo sesgo económico, llevará a numerosas industrias a la chatarra perdiendo puestos de trabajo y capacidad productiva que no se recuperan en plazo alguno. Esta situación sin duda alguna asfalta el camino a la reprimarización de la economía y nos deja desvalidos en la defensa de nuestros numerosos recursos sin poder industrializar, frenando así la posibilidad del trabajo digno a miles de compatriotas. En síntesis, se engrosa y hace eterna la cadena de la dependencia, consolidando un sistema por el que nuestras riquezas son saqueadas y robadas por un puñado de capitales depredadores.

Otro punto de importancia que separa al "liberal-libertario" del pensamiento de Alberdi es su publica alianza a los EEUU e Israel, los más grandes criminales de todos los tiempos, que en la actualidad llevan adelante entre otras guerras el genocidio y devastación del pueblo palestino que resiste con heroísmo y apoyo de los pueblos del mundo. Milei ha ignorado la condena al Tratado de la Triple Alianza de 1865 por "hacer la guerra de despoblación y empobrecimiento, que hicieron desaparecer a cincuenta mil argentinos y devastaron al Paraguay". Esto que llevó a Alberdi a escribir "El crimen de la guerra", un claro manifiesto que ha sido base de los muchos pronunciamientos antibélicos en el mundo, cobrando su pensamiento dimensión universal. No podemos dejar de señalar que junto a Alberdi en la condena a aquella guerra estuvieron también un puñado de patriotas americanos como lo fueron Felipe Varela, José Hernández, Ricardo López Jordán y otros que junto al pueblo argentino resistían las levas forzadas para ir a la guerra contra sus hermanos americanos.

Milei es un conservador contrarrevolucionario filo fascista. Quiera la voluntad de nuestro pueblo alejar de nuestro suelo los peligros y miserias que la situación política en curso, amenaza.

Diego Quintero

Dos hitos en la historia del comunismo

La fundación del PC

El Partido Comunista argentino fue fundado en enero de 1918, bajo el primer nombre de Partido Socialista Internacional. Su aparición fue el resultado de una dura lucha contra el reformismo liberal que expresaba el Partido Socialista, dando nacimiento al primer partido revolucionario de nuestro país, cuyo surgimiento está directamente ligado con la lucha internacionalista contra la guerra imperialista (Primera Guerra Mundial) y con la gran revolución proletaria de 1917 en Rusia. Algunos años después, la adhesión a la III Internacional ratificó la vocación de construir un destacamento que peleara por el poder inspirado en la experiencia bolchevique.

Sus miembros llevaron adelante esta acción convencidos de que era necesario dotar a la clase trabajadora argentina de un partido revolucionario imbuido de las tesis de Marx y Lenin, que preparara el camino de la revolución socialista y la toma del poder en la Argentina. Aquellos militantes entregados de cuerpo y alma a la tarea revolucionaria realizaron la audaz faena de fundar el primer partido de los comunistas.

En marzo de 1919 el PSI participaría de la primera reunión de la Internacional Comunista y en diciembre adoptaría el nombre definitivo de Partido Comunista Argentino (PCA). El motivo ideológico de la ruptura del grupo fundador del PCA nació del debate acerca de la postura de los diputados socialistas en el congreso que apoyaban la moción de los conservadores y los radicales a favor de la ruptura de relaciones diplomáticas de la Argentina y Alemania a raíz del ataque a un barco de bandera nacional por parte de la flota alemana. El debate ante el posicionamiento del PS frente a la guerra dividió las aguas provocando la ruptura y la expulsión de aquellos que defendían la posición de la neutralidad de nuestro país frente al conflicto mundial basándose en las tesis expuestas por Lenin acerca del carácter de guerra de rapiña imperialista.

Para estos jóvenes revolucionarios el PS se había convertido en un partido cada vez más integrado al régimen burgués de representación parlamentaria, que creía que desde las bancas del congreso se podían imponer las leyes que terminaran con la miseria y la explotación de los trabajadores y que veía la doctrina de Marx como un aporte entre otros más que integraban su caudal ideológico.

El nuevo partido levantaba las banderas de Marx y de Lenin con el ejemplo de la Revolución de Octubre como meta y ejemplo internacional para la clase obrera argentina. Entre sus principales dirigentes se encontraban José F. Penelón, Rodolfo Ghioldi y Vittorio Codovilla.

La huelga de la construcción de 1936

La década de 1930 marcó un nuevo movimiento ascendente en la lucha de la clase obrera argentina. La gran huelga de 96 días de los obreros de la construcción y la huelga general del 7 y 8 enero de 1936 serán sus mojones más combativos y de máximo enfrentamiento contra los gobiernos de turno. Esta huelga señaló el ascenso del nuevo proletariado industrial y el surgimiento de los sindicatos por rama de la industria argentina.

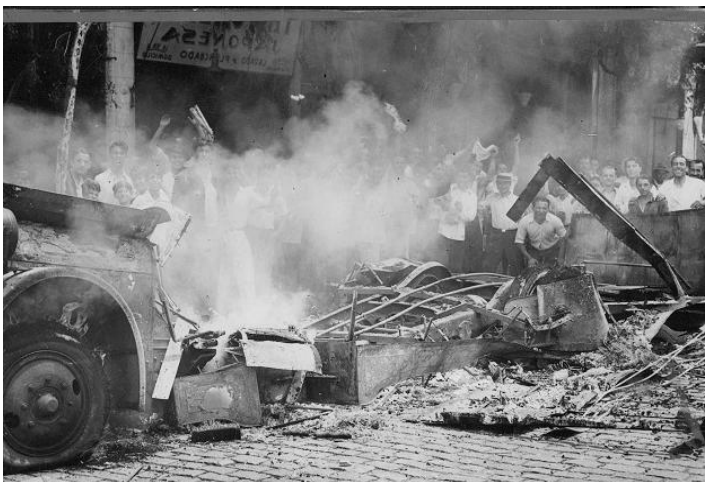
La crisis económica de 1929 había repercutido ferozmente en la economía nacional. Las clases dominantes aliadas al imperialismo británico buscaban salir del estancamiento general tomando una serie de medidas proteccionistas. Se marchaba a un proceso de industrialización dando lugar al desarrollo de un mercado interno y de una nueva industria de bienes de consumo: la sustitución de importaciones. En este marco, Buenos Aires se convirtió en un punto de concentración de quienes acudían a la ciudad en busca de trabajo, y la Capital Federal pasó a ser el lugar de mayor concentración de obreros industriales: 216.000, representando un 54,8% del total del país.

El proletariado industrial comenzó a cobrar una gran importancia en la política argentina. Fue en la construcción y en la industria de materiales donde el desarrollo se hizo más notable. Con jornadas de 11 horas de trabajo, y hasta en algunos casos 14, pésimas condiciones de seguridad y salarios paupérrimos, el movimiento obrero comenzaba a mascullar su bronca. El derrumbe en una obra en el barrio de Belgrano, que tuvo víctimas fatales, detonó la rabia acumulada en los trabajadores.

En febrero de 1935 se había formado el Sindicato de Obreros Albañiles, Cemento Armado y Afines, bajo la dirección del PC -donde otrora dirigían los anarquistas-, cuyo rol en la huelga de la construcción será fundamental.

Tres meses más tarde, luego del accidente de la obra de Belgrano, una asamblea convocada por la Federación Obrera de Sindicatos de la Construcción (FOSC) eligió un comité de huelga. La huelga se declaró para arrancarles a los patrones el reconocimiento al sindicato, aumento de los salarios, tope a las horas de trabajo y condiciones de seguridad en las obras. La huelga general se declaró para el 7 de enero de 1936.

El Estado y sus fuerzas represivas estaban en alerta y desde las primeras horas se pusieron en acción. Al comenzar la huelga, fueron apresados los dirigentes del Comité, clausurados los locales y los comedores. Este golpe no inhibió a los revolucionarios y trabajadores: la huelga continuó desde la ilegalidad.



En la mañana del 7 de enero se registraron movilizaciones de los obreros y los choques callejeros. La mayor cantidad de acciones sucedieron en Paternal y Villa del Parque. La violencia se multiplicó; las masas volcadas a las calles incendiaron y destruyeron todo transporte que no hubiera cumplido con la orden del paro. Los enfrentamientos no cesaron y finalmente la policía debió retirarse. En el transcurso del día, los manifestantes se habían adueñado de una parte de la ciudad. Los miembros del Comité que no habían sido apresados llamaron a continuar la huelga un día más por la libertad de los presos y en repudio a la represión. El presidente Justo intervino instando a las empresas a dar una solución. Obligadas a retroceder, éstas mejoraron la oferta salarial, aunque se negaron a firmar el reconocimiento del sindicato. El 23 de enero una asamblea en el Luna Park aprobó las condiciones del acuerdo dando por terminado el conflicto.

Cierre de una primera experiencia

La influencia del PC como educador y formador de la conciencia de clase en el proletariado argentino tuvo los sucesos de los años 30 como el punto máximo de desarrollo de la aplicación de la teoría marxista leninista a la realidad de la lucha de clases argentina. La década del 30 y parte de la década del 40 tuvieron al PC como principal interlocutor de las aspiraciones, reclamos y luchas de los trabajadores argentinos. En los años previos y durante la Segunda Guerra Mundial, el PC también cumplió con sus deberes de combatiente internacionalista, promoviendo y organizando la solidaridad con la República española -a cuya defensa marcharon varios de sus cuadros y simpatizantes- y luego encarando la lucha contra el nazi-fascismo y en defensa de la Unión Soviética.

En ese período, cierto dogmatismo en la caracterización de los proyectos políticos locales lo hizo alejarse de la clase trabajadora, fundamentalmente en relación al peronismo, que le sacó muchos cuerpos de ventaja en inserción e influencia entre los trabajadores. Pero fue sobre todo su posicionamiento en el debate del movimiento comunista internacional, con la adhesión al XX Congreso del PCUS y la línea antileninista de Nikita Krushov, lo que lo alejó de sus orígenes revolucionarios.

Se abrió la etapa de refundación del partido, experiencia desatada al calor de la Revolución China y la denuncia de Mao al revisionismo soviético, período histórico de la aparición de nuestro partido bajo el nombre de Vanguardia Comunista. Lo cual no quita, sino que más bien afirma, que la fundación y los primeros años de la trayectoria del PC son un antecedente imprescindible para la historia política de la clase obrera argentina. Los comunistas juzgamos al árbol por sus frutos y por su historia. Por eso reivindicamos aquellas primeras camadas de revolucionarios que fundaron el PCA.

El balance de esa primera experiencia y de su evolución posterior, así como de todos los proyectos que buscaron la revolución, especialmente en la generación del '60 y del '70 -dentro y fuera del marxismo leninismo, incorporando los aportes del peronismo revolucionario- deben servir hoy para avanzar en la construcción del destacamento superior de la clase obrera, para que encabece la unidad de las fuerzas antimonopólicas, antiimperialistas, patrióticas y populares que imponga un programa de liberación nacional hacia el socialismo. El PRML reafirma su vocación de transitar este camino revolucionario, combatiendo el ajuste en curso y haciendo de ese combate un insumo para la construcción del partido de la revolución.

Facundo Palacios

Primera parte

A 100 años de la muerte de Lenin

Publicamos la primera parte de esta nota dedicada a analizar la trayectoria política del revolucionario más importante del siglo XX, dirigente de la gran Revolución de Octubre e inspirador de los partidos revolucionarios de todo el mundo. A un siglo de su muerte, las banderas que levantó Lenin siguen flameando en manos de los comunistas que luchamos por la Revolución, la Liberación y el Socialismo.

Vladímir Ilich Uliánov, mundialmente conocido como Lenin, nació el 22 de abril de 1870 en la ciudad de Simbirsk (hoy Uliánov), situada a orillas del Volga, el gran río ruso. Creció en una época donde Rusia vivía grandes cambios. El desarrollo del capitalismo hacía que surgieran fábricas y establecimientos industriales con maquinaria moderna y miles de obreros. No obstante, persistían aún muchos resabios del régimen feudal.

El joven Vladímir creció con la influencia de su hermano Alexandr Uliánov, quien integraba el grupo Naróndnaia Volia ("La voluntad del pueblo", sociedad secreta populista revolucionaria). Fue él precisamente quien le proporcionó los primeros materiales de literatura marxista. En marzo de 1887, Alexandr fue detenido en San Petersburgo por haber participado en la preparación del atentado contra el Zar Alejandro III, siendo ejecutado en mayo de ese año. El hecho conmovió profundamente a Lenin y reafirmó su decisión de consagrar su vida a la lucha revolucionaria. A pesar de la gran admiración que sentía por su hermano, Lenin fue crítico de la línea de los populistas, que subestimaban el lugar estratégico que el proletariado ocupaba en la sociedad capitalista, y que pretendían reemplazar la intervención revolucionaria de las masas por actos de terrorismo aislado: de ahí el plan de asesinar al zar y sus funcionarios como "excitante" para el pueblo.

En su paso por la Universidad, abocado a la carrera de Derecho en Kazán, Lenin se acercó a estudiantes progresistas de tendencia revolucionaria, en un contexto de álgido debate entre marxismo y populismo. A fines de 1887 fue expulsado de la universidad y luego detenido por su activa participación en las asambleas estudiantiles. Tenía 17 años. Confinado en la aldea de Kokúshkino, provincia de Kazán, integró círculos marxistas clandestinos.

Luego de vivir algunos años en Samara, en 1893 se mudó a San Petersburgo, capital del Imperio, para acercarse al movimiento obrero y los centros clandestinos marxistas. En el otoño de 1895 Lenin logró unificar todos los círculos marxistas de la ciudad en una sola organización política, que más tarde recibió el nombre de "Unión de Lucha". Los círculos obreros de las fábricas y empresas industriales constituían la base de la Unión. Lenin educaba a los integrantes de la "Unión" en un espíritu de estricta disciplina, de subordinación a la instancia superior y de preciso cumplimiento de las directivas. Se estableció el control de todos los eslabones de la organización. La "Unión de lucha" fue el embrión del partido marxista revolucionario de Rusia.

Al final de ese año, el gobierno zarista detuvo a la mayor parte de sus dirigentes, entre ellos a Lenin. Así, fue recluido en la cárcel de San Petersburgo por más de catorce meses. En ese entonces comenzó con la escritura del libro "El desarrollo del capitalismo en Rusia", que culminará durante su destierro en Siberia oriental, luego de la sentencia dictada el 13 de febrero de 1897. El libro fue un gran aporte para la elaboración científica de la teoría, el programa y la estrategia del partido proletario.

De la Iskra al partidode nuevo tipo

Luego del I Congreso del POSDR en 1898, y sus limitaciones en cuanto a la generación de una sólida organización de socialdemócratas rusos, Lenin ideó un plan para la creación del partido marxista revolucionario. El papel fundamental estaba representado por la creación de un periódico político para toda Rusia. Tal periódico habría de elaborar un programa y un estatuto únicos, cohesionar los comités y grupos sobre la base de los principios del marxismo revolucionario y desarrollar ampliamente las tareas preparativas para el II Congreso. Pero Lenin no circunscribía los objetivos del periódico sólo a fines de propaganda y agitación. Llegó a la conclusión de que debía convertirse en organizador de las fuerzas del partido, siendo una herramienta de unificación de los círculos y grupos de socialdemócratas locales en una sola organización. Era un concepto nuevo sobre la prensa marxista.

Tan pronto recuperó su libertad, se entregó a la tarea de realizar este plan. Dada la situación en Rusia debido a la represión policial, decidió que el periódico debía ser publicado en el extranjero. Su nombre fue "Iskra" (chispa). La redacción se estableció en la ciudad alemana de Múnich. En diciembre de 1900 apareció el primer número, cuyo epígrafe rezaba: "De la chispa nacerá la llama".

En 1902, Lenin publicó el folleto *"¿Qué hacer?"*, el cual puede sintetizarse bajo la idea central de que "sin teoría revolucionaria no puede haber movimiento revolucionario". De ahí surge el objetivo inmediato de los socialdemócratas: iniciar la educación política de la clase obrera, a fin de elevarla hasta la conciencia socialista. Lenin asignaba gran importancia a la organización de un partido centralizado y cohesionado, razón por la cual preparó el plan para estructurarlo. Consideraba que el partido debía componerse de dos partes: un reducido núcleo de revolucionarios profesionales, y una amplia red de organizaciones partidarias locales, la masa de los miembros del Partido.

Este problema fue debatido en el II Congreso del POSDR. Luego del mismo, las dos corrientes presentes al interior del partido, "mencheviques" y "bolcheviques", lucharían por la orientación ideológico - política del proyecto de los socialdemócratas. Mientras los bolcheviques eran partidarios de un partido disciplinado y de combate cuya extracción social fuera la clase obrera, los mencheviques propiciaban un partido amplio, sin fronteras claras entre militantes y simpatizantes y sin una identidad de clase definida.

Así, esta discusión llevará a una escisión del partido en abril de 1905, en un año en donde se produjo una primera revolución que vería nacer a los soviets, combinando la huelga obrera y popular con la insurrección urbana, y que daría nacimiento a la Duma, el primer parlamento ruso. En ese proceso, los bolcheviques propiciaban la participación del proletariado en la revolución democrático burguesa, peleando por su dirección para darle la mayor profundidad posible, poniendo el blanco en el zarismo y aliándose con el campesinado: de ahí su programa de dictadura democrática del proletariado y el campesinado y la táctica consecuente, explayada en la obra *"Dos tácticas de la Socialdemocracia frente a la revolución democrática"*. Allí se polemizaba con los mencheviques, quienes desde un izquierdismo infantil sintetizado en su consigna "sin zar por un gobierno obrero", se desentendían del rol dirigente que debía jugar el proletariado en la realización de las tareas democráticas, regalando la dirección del proceso político a los sectores más claudicantes de la burguesía, y por ende yendo objetivamente a su zaga.

Ese período de ascenso revolucionario marcaría los debates en torno a la actitud a tomar hacia la Duma, el programa agrario y los partidos burgueses, es decir sobre la naturaleza de clase de cada uno de estos problemas, y principalmente del Estado, expresados por el IV y V Congreso del POSDR. Luego se abrió el período de reflujo y de reacción del zarismo, en donde los bolcheviques serían intensamente perseguidos.

Imperialismo y guerra de rapiña

La guerra imperialista comenzó en el verano de 1914. Luchaban dos grupos de poderosos Estados imperialistas: Alemania y Austria-Hungría por un lado, Inglaterra, Francia y Rusia por el otro. Más tarde el conflicto se extendió a Estados Unidos, Japón y otros Estados, adquirió carácter mundial y se transformó en un gran desastre para los pueblos.

Lenin elaboró un programa de lucha contra la guerra imperialista. Allí explicó que la guerra europea y mundial que se había iniciado era imperialista. Había sido desatada por la burguesía y el zarismo con el objeto de materializar sus planes de rapiña y de reprimir, en el orden interno, el creciente movimiento revolucionario del proletariado. Al llamamiento de los oportunistas "en defensa de la patria", Lenin opuso un llamamiento revolucionario a transformar la guerra imperialista en guerra civil, en guerra de la clase obrera y las masas trabajadoras contra la burguesía en sus países. Esta consigna coincidía con las resoluciones de los congresos socialistas internacionales acerca de la táctica de la clase obrera ante la guerra y se convirtió en consigna fundamental del partido bolchevique.

En *"El Imperialismo, fase superior del capitalismo"*, Lenin explicó que esta etapa del desarrollo capitalista estaba caracterizada por el surgimiento de los monopolios, dónde la esencia del capitalismo no se define más por la exportación de mercancías sino por la exportación de capitales, lo que redundaba en la división del mundo en naciones imperialistas que pelean por el reparto del dominio económico y político de los países coloniales, semicoloniales y dependientes. Esto marcó también el hecho de que la revolución socialista no necesariamente debía producirse en todos los países al mismo tiempo, sino que podía producirse país por país, y que el proletariado de los países imperialistas debía apoyar las luchas de las naciones sometidas por su liberación nacional.

Esteban Pietri

Canal de Suez: jaque a las potencias

El paso de embarcaciones desde Asia a Europa a través del Canal de Suez, vital para el comercio mundial, se encuentra actualmente en riesgo a raíz de los ataques contra buques comerciales y militares realizados por el grupo político militar de ideología islámica Organización Huti, que cuenta con más de 100 mil combatientes en Yemen controlando el acceso de mercancías al Mar Rojo desde el Océano Índico. En términos globales, el 40% del comercio entre Europa y Asia pasa por el Mar Rojo.

Los asaltos hutíes a diferentes embarcaciones se generaron en respuesta a la masacre del ejército israelí en la Franja de Gaza. La alteración en la circulación de embarcaciones comenzó en noviembre, tras el aterrizaje de un helicóptero tripulado por milicianos hutíes en la cubierta del Galaxy Leader, un navío británico vinculado a Israel. En dicha ocasión, el carguero y su tripulación fueron detenidos en el puerto de Hodeidah, controlado por los hutíes.

En diciembre, tras un nuevo ataque contra dos buques mercantes, cuatro de las compañías navieras más grandes del mundo (que representan más del 50% de la capacidad mundial de transporte de contenedores) suspendieron los viajes a través de Bab al-Mandeb, la puerta de entrada en el extremo sur del Mar Rojo en dirección al Canal de Suez, y lo propio hicieron la compañía naviera israelí ZIM, que también anunció el desvío de su flota hacia el Cabo de Buena Esperanza, y la British Petroleum. Todos ahora condicionados a rodear África para acceder a Oriente desde Europa, agregando entre 5.500 y 6.500 kilómetros de ruta y de 7 a 10 días a un viaje típico entre ambos continentes.
Dada la vulnerabilidad de las naves en el Mar Rojo, a tiro de misiles y drones hutíes, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, anunció recientemente la Operación Guardián de la Prosperidad, una iniciativa de seguridad liderada por Estados Unidos e integrada por Gran Bretaña, Bahréin, Canadá, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega, Seychelles y España para realizar ataques aéreos contra diferentes objetivos hutíes.

Como advertencia, la directora general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala, indicó que estos y otros conflictos geopolíticos podrían perturbar sustancialmente la recuperación pospandemia del comercio mundial en 2024, destacando que el paso desde el extremo oriente a Europa es crucial para el tránsito de aproximadamente el 20% del petróleo mundial y el 25% del comercio mundial de gas natural licuado.

El incremento de tiempo de entrega por las distancias y, por ende, de permanencia de los buques en viaje, genera también un aumento en los tiempos de permanencia de contenedores en los puertos comerciales. Por último está el incremento de los costos. El 80% de los casi USD14.000 millones mensuales que India comercia con Europa a través del Mar Rojo han triplicado sus precios por el desvío, y otro tanto sucede con China, Corea, Japón, etc.

El incremento del costo del transporte de mercancías desde el Sudeste Asiático a Europa supone un riesgo de interrupción de la cadena de suministro y de suba de los precios al consumo. La cifra es comparable a la capacidad paralizada en 2021 durante el punto álgido de la pandemia, según el Índice de Presión de la Cadena de Suministro Global que elabora el Banco Mundial.

A corto plazo, es probable que el sector del transporte mundial de contenedores absorba los impactos en la capacidad causados por los ataques a navíos en el mar Rojo porque la demanda es generalmente baja en enero y febrero; sin embargo, si las agresiones continúan, cuando el comercio mundial tenga un repunte estacional, las limitaciones podrían desencadenar una crisis en la cadena de suministro como la que ocurrió en 2021-22.

El agravamiento para el comercio es una de las razones por las que EE.UU. señaló la necesidad de terminar la agresión israelí al pueblo palestino y así restar motivos a los ataques hutíes. EE.UU. aseguró el 8 de febrero que una operación militar israelí en Rafah sería un "desastre" que "no apoyará".

Por otra parte, algunos observadores como Frank Gardner, corresponsal de seguridad de la BBC, han sugerido que una escalada de los ataques británicos y estadounidenses contra los hutíes tendría un resultado incierto para la coalición. Por lo pronto, el 11 de enero pasado los rebeldes hutíes de Yemen declararon ayer una «guerra abierta» a EE.UU. y al Reino Unido, después de que bombardeasen varias posiciones rebeldes en tierra firme.

La jugada parece arriesgada. Un informe reciente de la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos destacó el fortalecimiento de la relación entre los hutíes e Irán. Desde 2014, afirma, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Qods de Irán ha proporcionado a los hutíes un arsenal de armas y entrenamiento sofisticados. Esta ayuda ha permitido a los hutíes llevar a cabo una campaña de ataques con misiles y vehículos aéreos no tripulados contra el transporte marítimo comercial en el Mar Rojo desde noviembre de 2023, amenazando la libertad de navegación y el comercio internacional en una de las vías fluviales más críticas del mundo.

Corrido por una crisis del transporte marítimo, la elevación del precio de las mercancías, la interrupción de la cadena de suministros y una aduana insurgente administrada por un enemigo de temer, la beligerancia de EE.UU. y sus socios recuerda a ese perro que, girando en una espiral sin fin, intenta infructuosamente atrapar su cola.

Jorge Díaz

Milei apoya el terrorismo israelí

La primera visita internacional de Milei como presidente fue en diciembre a la sinagoga de Jabad-Lubavitch, en Brooklyn, EE.UU. Ahora cumple con su promesa de campaña al realizar un viaje diplomático al Estado de Israel. En sus palabras: *"Viajo a Israel para defender su derecho a la defensa, profundizar lazos comerciales y de afecto"*.

Según el presidente de la Nación estos viajes son de índole espiritual. Espíritu que se encarna en vínculos políticos y económicos con el sionismo. Estos vínculos son parte de su alianza a nivel nacional con Eduardo Elsztain, presidente de la Fundación IRSA, dueño del Hotel Libertador (dónde se alojó Milei durante su campaña) y titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Como también su alianza con el Movimiento Betar en Argentina, organización juvenil sionista vinculada al partido de Benjamín Netanyahu, el Likud, que gobierna Israel bajo una política de ocupación, apartheid y genocidio al pueblo palestino. Su visita incluyó reuniones con el primer ministro y el presidente Isaac Herzog.

Desde el 7 de octubre se viene intensificando el terrorismo por parte de Israel invadiendo la franja de Gaza. Una política imperialista brutal y asesina, que ha sido rechazada en estos últimos meses hasta por el mismo presidente Biden.
Bajo el pretexto de defenderse de los ataques de Hamas del 7 de octubre, el gobierno liderado del Likud inició con una guerra de aniquilación del pueblo palestino. La misma incluye el bloqueo de alimentos, agua potable y todo tipo de ayuda humanitaria al pueblo palestino. En las últimas semanas, producto de cuatro meses de guerra, se contabilizan 27.840 muertos según las últimas cifras del Ministerio de Salud del enclave palestino, si no se cuentan las que quedan bajo los escombros de las viviendas arrasadas por los bombardeos. Las últimas noticias que llegan son la intensificación de la guerra y el ataque aéreo por parte del Ejército israelí a Rafah, el otro campo de refugiados fronterizo con Egipto, donde viven más de 1 millón de personas y donde busca refugio el resto de los palestinos, más de 1,3 millones de personas (más de la mitad de la población de Gaza) que huyen de los bombardeos diarios. Una medida que amenaza con romper el Tratado de Paz entre Egipto e Israel.

En este contexto es que Milei visita Israel, legitimando esta política genocida. Visita en la cual confirmó su objetivo de mudar la embajada argentina a Jerusalén, política que solo impulsaron EE.UU. y un puñado de países más.

Hay que levantar las banderas del derecho del pueblo palestino a su autodeterminación para que pueda construir una nación libre y soberana, dónde el imperialismo israelí - yanqui no puede entrometerse en los asuntos internos ni un "tantico". Levantar esa bandera es parte de un programa antimperialista y antimonopólico que debe ser tomado en la Argentina, porque el sionismo es un mal que acecha a los pueblos y las naciones del mundo. Cortar todo tipo de vínculo con los sectores económicos-políticos, es parte de un programa de boicot, desinversiones y sanciones (BDS) a todo interés sionista que acumula poder y capital sobre la base del dominio sobre territorio nacional, como a la vez de su poder a nivel mundial y sobre Palestina.

Hacemos un llamado a construir espacios y acciones conjuntas en este camino, ya que el tiempo se agota y cada segundo que pasa es una bomba más sobra la cabeza de un compatriota palestino.

Esteban Pietri